



Resumen ejecutivo
del informe

El precio de aprender

Justicia fiscal, soberanía presupuestaria, y más
cooperación

La asfixia presupuestaria global amenaza el derecho a la educación

Un análisis sobre cómo la militarización, los conflictos comerciales, la deuda externa, la creciente influencia corporativa y los recortes presupuestarios amenazan el derecho fundamental a una educación universal, inclusiva y de calidad.

La financiación educativa atraviesa una crisis estructural sin precedentes. El derecho internacional reconoce la educación como un derecho humano fundamental y un bien público global, lo que obliga a los Estados a destinar el máximo de sus recursos para garantizar su realización progresiva. Sin embargo, los Estados han incumplido sus obligaciones: **la militarización de la economía, la crisis del multilateralismo y el avance del negocio en las aulas** imponen una lógica comercial que erosiona la equidad del sistema.

La educación es clave para erradicar la pobreza, alcanzar la igualdad de género y construir una paz duradera. No asistimos a una falta de recursos globales, sino a **una incoherencia presupuestaria donde los derechos humanos han dejado de ser prioritarios**. El derecho a una educación universal, inclusiva y de calidad no puede quedar supeditado a agendas geopolíticas ni al mercado.

Crisis de la cooperación y recortes presupuestarios

La educación sufre graves recortes en Ayuda Oficial al Desarrollo y Ayuda Humanitaria, junto a presupuestos nacionales asfixiados por la deuda y la falta de justicia fiscal:

Recortes en AOD: En 2025, EE.UU. dismanteló USAID. Alemania reducirá su presupuesto de AOD un 37%, Francia recortó 2.300 millones de dólares en tres años y Reino Unido traspasará directamente recursos de cooperación al presupuesto militar.

El peso de la deuda: En 48 países los gobiernos destinan más recursos al pago de intereses de la deuda externa e interna que a la financiación de la educación y la salud juntas.

Abuso fiscal frente a la brecha del ODS 4: La brecha de financiación para asegurar una educación de calidad ronda los 200.000 millones de dólares al

año, frente a los 480.000 millones que la elusión fiscal drena anualmente de las arcas públicas.

Privatización e influencia corporativa:

Aprovechando la asfixia financiera de los Estados, grandes corporaciones cierran acuerdos con los ministerios ofreciendo soluciones que redefinen los fines de la educación pública. Como muestra, las instituciones privadas absorben ya el 33% de la matrícula universitaria mundial.

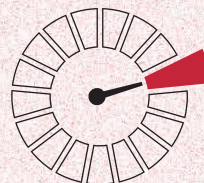


La crisis de financiación educativa quiebra proyectos de vida. Desde las redes de Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados, constatamos cómo la escasez de recursos aísla a la infancia ucraniana en Rumanía. Como en El Salvador, los recortes redujeron programas socioeducativos de 10.000 a menos de 1.000 estudiantes. O en Chad, donde la desatención del Sahel aboca a miles de niños y niñas desplazados a escuelas improvisadas, amenazadas de cierre por falta de salarios dignos a los docentes. Tres síntomas de un sistema con las prioridades invertidas. Garantizar la educación no es opcional, sino un imperativo de justicia social, derechos humanos y soberanía democrática.



Cuentas pendientes

Consecuencias del déficit presupuestario y brechas regionales del ODS 4



Meta 4.1

Educación primaria y secundaria universal

Aulas masificadas, infraestructuras escolares deficientes y escasez de recursos básicos como agua potable y saneamiento en las regiones más vulnerables.



Meta 4.3

Educación técnica y superior

Altos costes de matriculación en la educación superior y una crónica insuficiencia de becas y ayudas públicas para estudiantes de familias de bajos ingresos.



Meta 4.5

Igualdad de género e inclusión

Gasto público regresivo que favorece a los hogares más ricos, cronificando que las niñas y mujeres de zonas rurales sufran un menor acceso a los recursos.



Meta 4.7

Ciudadanía global y desarrollo sostenible

Partida inexistente en presupuestos nacionales o delegada a fondos externos, ignorando su peso clave para transformar las sociedades.



Meta 4.b

Becas para educación superior y FP

Programas de becas estancados y mal distribuidos, lo que impide la movilidad académica de los estudiantes con menos recursos.

Meta 4.2

Primera infancia



La inversión es marginal en los presupuestos del Sur Global, y en el Norte no se garantiza que sea un derecho universal y gratuito.

Meta 4.4



Competencias profesionales y digitales

Brecha digital cronificada por la falta de conectividad en los centros educativos, escasez de equipos tecnológicos y software pedagógico obsoleto o infrautilizado.

Meta 4.6

Alfabetización de adultos



Estancamiento en las tasas de alfabetización de jóvenes y adultos vulnerables debido a la falta de programas públicos específicos y de financiación comunitaria.



Meta 4.a



Instalaciones seguras e inclusivas

Menos del 60% de las escuelas del Sur Global cuentan con infraestructura adaptada para estudiantes con discapacidad, sumado a la falta de suministro eléctrico estable.

Meta 4.c



Formación y capacitación docente

Déficit global de 44 millones de docentes. Los bajos salarios desmotivan la profesión y la falta de inversión congela los programas de formación continua.



Tras analizar los datos, tendencias y testimonios recopilados sobre la financiación de la educación, condensamos nuestro diagnóstico en las siguientes siete conclusiones clave:

1. La paradoja global: priorizar las armas, asfixiar las aulas. El gasto público educativo global sigue estancado en el 4,2% del PIB, mientras los países de bajos ingresos en sobreendeudamiento pasaron del 27% al 58%. En contraste, el gasto militar mundial alcanzó en 2024 un récord de 2,7 billones de dólares (+6,8%). Esta economía de guerra alimenta conflictos y desplazamientos forzados que colapsan los sistemas educativos, evidenciando una falta de voluntad política en favor de la paz y la equidad frente a tensiones comerciales e inestabilidad económica.

2. El asalto a la gobernanza: cuando el mercado dicta las reglas. La irrupción de actores privados con intereses comerciales en los espacios de decisión pública diluye la responsabilidad estatal y subordina el derecho a la educación a lógicas de mercado. Asimismo, las grandes corporaciones tecnológicas consolidan su presencia mediante infraestructura digital e Inteligencia Artificial, generando dependencias que comprometen la autonomía pedagógica y la privacidad del estudiantado.

3. El abismo presupuestario: opacidad de datos y elusión fiscal. Afrontamos un déficit de casi 100.000 millones de dólares anuales para alcanzar los objetivos del ODS 4 en países de ingresos bajos y medios. Esta brecha convive con políticas tributarias regresivas que permiten una evasión y elusión fiscal de entre 480.000 millones y 1,2 billones de dólares al año. La opacidad y la falta de datos adecuados

impiden además reorientar eficientemente las políticas públicas.

4. Alianzas público-privadas: el riesgo de hipotecar el derecho universal. Aunque prometen innovación, las alianzas público-privadas atan la flexibilidad presupuestaria pública a largo plazo e introducen criterios de rentabilidad incompatibles con la gratuidad. Esto prioriza a sectores con mayor capacidad de pago y erosiona la capacidad del Estado para garantizar estándares educativos homogéneos y contextualizados.

5. El yugo financiero: la trampa de la deuda y la saga de la austeridad. La arquitectura financiera internacional antepone el servicio de la deuda externa al financiamiento social, ahogando a las economías más vulnerables. A esto se suman las recetas de austeridad del FMI y el Banco Mundial, que fuerzan recortes en el gasto público educativo, precarizan los salarios docentes y degradan las infraestructuras escolares.

6. Retórica frente a realidad: el declive de la cooperación internacional. La AOD y la ayuda humanitaria sufren caídas reales que cierran aulas en crisis crónicas. Menos del 20% de la AOD se destina a educación y los donantes desvirtúan su impacto computando gastos que no corresponden. Además, en España, la cooperación descentralizada sufre recortes drásticos ante el auge de discursos anticooperación y pactos de gobernabilidad con la extrema derecha.

7. La mirada neocolonial: dependencia externa y pérdida de soberanía. Persiste una narrativa neocolonial que responsabiliza a la escasez local en vez de a las asimetrías del sistema global. La ayuda internacional se presenta como única solución pero impone condicionalidades, subordinando las prioridades educativas nacionales a los intereses geopolíticos y comerciales de los países donantes.





Nos dirigimos a quienes ostentan la responsabilidad de decidir: blindar el derecho fundamental a aprender no admite más esperas, exige voluntad política y medidas urgentes:

A los estados

- Aseguren la financiación de la educación pública nacional destinando al menos el 6% del PIB y/o el 20% del gasto público total a educación, en línea con los compromisos de la Agenda de Educación 2030.
- Elaboren planes presupuestarios plurianuales con incrementos progresivos y sostenidos del gasto educativo que incluyan mecanismos robustos de verificación, monitoreo y rendición de cuentas.
- Implementen la sensibilidad presupuestaria como principio rector, buscando la equidad en la redistribución de los recursos y priorizando el financiamiento de la educación de las poblaciones más excluidas.
- Establezcan marcos regulatorios estrictos para regular el sector privado dentro de la educación.
- Apoyen activamente la adopción de una Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional.

A la comunidad de países donantes

- Alcanzen y superen el compromiso de destinar al menos el 0,7% del Ingreso Nacional Bruto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), priorizando a los países de menores ingresos, destinando al menos el 20% de esta ayuda a educación para revertir la tendencia decreciente actual, y estableciendo que al menos el 80% de la AOD educativa se entregue mediante donaciones no reembolsables.

- Comprometan recursos económicos a medio y largo plazo que permitan a los países socios realizar planificaciones estratégicas sostenibles.
- Eliminen condicionalidades lesivas que obligan a adquirir bienes o servicios de empresas del propio país donante, así como las prácticas de ayuda inflada en el sector educativo.
- Renegocien las condiciones de endeudamiento y realicen operaciones de cancelación o conversión de deuda en países empobrecidos en situación de sobreendeudamiento o crisis, liberando de este modo recursos directos para la inversión educativa.

Al Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas

- Den cumplimiento estricto al calendario establecido en la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible para alcanzar el 0,7% del PIB destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo, garantizando que el 8% de la AOD bilateral se blinde específicamente para el sector educativo.
- Reconozcan la educación como un sector estratégico en la respuesta humanitaria destinando al menos el 10% de los fondos de acción humanitaria a garantizar el derecho al aprendizaje en contextos de crisis y desplazamiento forzado.
- Mantengan y aumenten el compromiso de los gobiernos locales y autonómicos con la cooperación internacional, consolidando la cooperación descentralizada como una de las señas de identidad y de solidaridad de la sociedad española.

- Insten a los gobiernos autonómicos y locales a revertir los recortes recientes en cooperación, calendaricen su senda hacia el 0,7% y cumplan la Ley de Cooperación, garantizando la transparencia, agilizando la gestión de las ayudas y blindando el apoyo a las organizaciones frente a los discursos anticooperación de la extrema derecha.

- Asuman un rol protagonista en los foros multilaterales para avanzar en el Compromiso de Sevilla y promuevan la reforma de la gobernanza financiera internacional. Además de respaldar las negociaciones de la Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal y activar mecanismos bilaterales urgentes de renegociación, cancelación y conversión de la deuda externa en el Sur Global.

- Frenen la deriva de la economía de guerra y se opongan activamente a la escalada belicista global, defendiendo el multilateralismo, la desmilitarización, la coherencia de políticas y el Derecho Internacional como condiciones indispensables para garantizar el derecho a la educación de todas las personas.

- Alcanzen de manera decidida y calendarizada una inversión del 6% del PIB nacional en educación pública, situando a España al nivel de las economías europeas más avanzadas en financiación educativa. Garanticen el acceso universal a una educación pública, inclusiva e igualitaria a través de una oferta de plazas suficiente y gratuita que cubra desde la



© Francesco Malavolta

educación infantil hasta la educación superior y universitaria.

- Implementen un escudo social de comedores escolares gratuitos para todo el alumnado que se encuentre en situaciones de vulnerabilidad.

- Amplíen la cobertura y la cuantía del sistema de becas públicas para garantizar la equidad y asegurar el acceso gratuito de los estudiantes a todas las actividades educativas.

- Diseñen los presupuestos educativos estatales y autonómicos bajo principios de justicia distributiva, priorizando la inclusión del alumnado con discapacidad, la población migrante y las comunidades históricamente marginadas.



Entreculturas apuesta por la justicia fiscal, la soberanía presupuestaria y una cooperación real para no dejar a nadie atrás.



Accede a la publicación completa